

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 15° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-29491-2018
CARATULADO	: VERA GIANNINI IMPRESORES S.A./SEREMI
SALUD SANTIAGO	

Santiago, veintidós de Junio de dos mil veinte

VISTOS:

Con fecha 21 de septiembre de 2018, comparece don Luis Fernando Bas González, factor de comercio, en representación de Vera y Giannini Impresores S.A., sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en calle Los Lingues N°751, comuna de Quilicura, quien interpone reclamo en contra de la resolución exenta N° 001407, de fecha 07 de Febrero de 2018, que aplicó una multa administrativa ascendente 600 UTM, y que fuera rebajada a 300 UTM mediante resolución N°004970, de fecha 20 de Julio de 2018, dictadas en el Sumario Sanitario N°2948-2017 notificado a su parte con fecha 12 de septiembre de 2018, dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, domiciliado en Paseo Bulnes N° 164, comuna de Santiago, y para efectos del proceso, en contra del Fisco de Chile, representado por su presidenta doña María Eugenia Manaud Tapia, ambos con domicilio en calle Agustinas N°1687, comuna de Santiago.

En primer lugar, interpone en contra del procedimiento seguido respecto de su representada y de la multa aplicada, la excepción de prescripción conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aplicable supletoriamente en este caso, que dispone: “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la



Foja: 1

fecha en que se emita la decisión final” y lo dispuesto en el Código Penal, que dispone que las faltas prescriben en el plazo de 6 meses y que el plazo de prescripción empiece a correr desde el día de la comisión del hecho respectivo.

Refiere que la supuesta infracción se constató el 19 de Julio de 2017, disponiéndose la instrucción del sumario sanitario en igual fecha y que la resolución recaída en dichos autos se dictó recién con fecha 7 de Febrero del 2018, esto es, después de cumplido el plazo de 6 meses de constatada la supuesta infracción, condenando a su representada al pago de la multa antes indicada y que posteriormente, con fecha 20 de Julio de 2018, se falló la reposición presentada en contra de dicha resolución.

Sostiene que en ese sentido, debe tenerse presente que el artículo 174 del Código Sanitario dispone que la infracción de cualquiera de las disposiciones de dicho Código, de sus reglamentos y de las resoluciones que dicten los Directores de los Servicios de Salud, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigado con multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales, de manera que se trata, en consecuencia, de una acción de un órgano del Estado que persigue la aplicación de una sanción pecuniaria contemplada en el Código Sanitario, y que, no existiendo norma expresa en dicho estatuto que establezca el tiempo de prescripción de la acción para perseguir y sancionar las infracciones sanitarias, procede aplicar supletoriamente las normas del derecho común contenidas en el Código Penal, que establecen que las faltas prescriben en el plazo de 6 meses.

Por otra parte, alega que la prescripción debe declararse por el órgano administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, aplicable supletoriamente en este caso.

En subsidio a la prescripción alegada, y como defensa de fondo, refiere en primer lugar que la sentencia impugnada, al resolver el sumario sanitario seguido en contra de su representada, derivado del accidente



Foja: 1

laboral sufrido por el trabajador don Paulo Tapia López, en síntesis dispuso lo siguiente: 1) Ratificar todo lo obrado por el Funcionario Inspector de la Seremi de Salud; 2) Aplicar en primer término a su representada una multa ascendente a 600 UTM; 3) Prevenir a su representada para que en el ejercicio de su actividad debe tomar todos los resguardos necesarios con el objeto de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores; 4) Apercibir a su representada con nuevas multas y demás sanciones en caso de reincidencia o incumplimiento, agregando que, posteriormente, mediante resolución N°004970, de fecha 20 de Julio de 2018, se acogió el recurso de reposición presentado por su parte en contra de la multa aplicada, rebajándose el valor de la misma a la suma de 300 UTM, resolución que también ratificó la sentencia N° 001407 en todas sus partes.

Refiere que la multa y demás sanciones establecidas en la resolución impugnada, se fundan, básicamente, en que a juicio de la autoridad sanitaria, los hechos consignados en el sumario sanitario constituyen una infracción a lo establecido en los artículos 3, 37 y 53 del D.S 594/99 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, fundamentándose aquella sentencia en la existencia de un evidente descuido por parte de su representada para evitar el accidente, que su representada no habría logrado acreditar que el trabajador accidentado se hubiese expuesto imprudentemente al daño, por cuanto no habría sido demostrada la conducta inapropiada del trabajador, sino que por el contrario se habría establecido en el sumario que fue la empresa la que no adoptó las medidas pertinentes, oportunas y eficaces para impedir o precaver situaciones como la acontecida en el accidente, que su representada no logró eximirse de la responsabilidad sanitaria en los hechos descritos en el acta de inspección y que los medios probatorios acompañados por su parte fueron considerados como atenuantes de su responsabilidad en los hechos constatados.

Luego, expone que la Resolución Exenta N° 4970, de fecha 20 de Julio de 2018, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por su parte, rebajando la multa aplicada a 300 UTM, contiene como principales fundamentos que la sentencia impugnada contiene los antecedentes que le



Foja: 1

sirven de fundamento, aplicándose una multa que se encuentra dentro del rango establecido en el artículo 184 del Código Sanitario, y que la ponderación de la gravedad de la infracción se efectuó aplicando un criterio técnico-sanitario, que consideró aspectos tales como número de personas afectadas, características de la actividad fiscalizada e infractora y facilidades prestadas por la entidad fiscalizada, motivo por el cual la resolución impugnada no es arbitraria ni carece de falta de fundamentos, por lo que no se han vulnerado los principios de proporcionalidad, ni existe falta de motivación ni una errónea calificación jurídica de los hechos, alegados en el recurso; que la ponderación de la pruebas incorporadas fue debidamente realizada por la autoridad sanitaria; que para rebajar la multa se consideró la oportunidad en que su representada adoptó una serie de medidas correctivas y finalmente ratificó en todas sus partes la sentencia N°001407, dictada con fecha 07 de Febrero de 2018, salvo la rebaja de la multa antes indicada.

.Argumenta que su parte no infringió ninguna de las normas señaladas en la resolución, sino que por el contrario, el accidente tuvo su origen en una acción imprudente cometida por el propio trabajador, quién apartándose de las instrucciones impartidas, lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el Procedimiento de Trabajo Seguro, Derecho a Saber, las diversas capacitaciones realizadas y un sentido de lógica elemental, cometió una acción insegura, introduciendo sin mirar su mano izquierda al interior de una máquina en movimiento, que contiene elementos cortantes que giran velozmente, procediendo para ello, por su propia iniciativa, a retirar la rejilla de seguridad que contiene la máquina, la cual impide todo contacto entre los elementos cortantes y las manos del trabajador.

Agrega que tal como se aprecia en el video obtenido de una cámara de vigilancia existente al interior de la empresa, con fecha 17 de Julio del año en curso, a las 20:34 aproximadamente, el trabajador don Paulo Tapia López sufrió un accidente al operar la máquina dimensionadora, marca Pizzolato, la cual se utiliza para dimensionar pilas de cartulina a pliegos de tamaños determinados, exponiendo que en las imágenes se advierte que



Foja: 1

encontrándose la máquina activada, en movimiento, el trabajador, presumiblemente con el propósito de retirar algún pedazo de cartulina u otro objeto que se encontraba atascado en su interior, abrió la rejilla de protección inferior existente al interior de la máquina, introduciendo su mano, activándose el sensor de seguridad que apagó la máquina; posteriormente el trabajador cerró la rejilla y activó manualmente la máquina. Instantes después, aparentemente por cuanto el problema no se había solucionado, el trabajador abrió la rejilla de seguridad superior de la máquina, introduciendo su mano izquierda en sentido contrario a la posición de su cuerpo, siendo atrapados los dedos de su mano. Indica que en esta última oportunidad, al abrir la rejilla de seguridad superior de la máquina, el sensor de seguridad que la apaga cuando se retira la rejilla, no funcionó, pese a que no existían reportes previos que dieron cuenta del desperfecto y que el mismo día del accidente se realizó la mantención de la máquina en la cual intervinieron 3 trabajadores especializados, sin que se haya detectado un problema en el sensor.

Expresa que su representada acompañó en el sumario sanitario el registro de mantenciones realizados en la máquina, incluyendo la que se realizó el mismo día en que se produjo el accidente por lo que éstas se encontraban al día y fueron realizadas por personal calificado, por lo que su parte ha dado cumplimiento al deber de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo y de los artículos 3, 37 y 53 del D.S 594/99.

Indica que el empleador cumple su obligación cuando adopta todas las medidas razonablemente necesarias que tiendan a evitar la ocurrencia de accidentes laborales, lo que en este caso se concretó con las diversas capacitaciones impartidas al trabajador, la entrega oportuna de los implementos de seguridad adecuados para la realización de las labores y la realización de mantenciones permanentes a las máquinas que utilizan los trabajadores, todo lo cual se hizo en este caso, y que quedó demostrado con la documentación que se acompañaron en el sumario.

De esta manera, e independiente de la alegación de su parte de que el accidente tuvo su origen en la actitud imprudente del propio trabajador, al



Foja: 1

abrir la rejilla de seguridad existente en la máquina, aun considerando que la causa basal del accidente fue la falla del sensor de seguridad de la rejilla que intervino el trabajador, habiéndose acreditado en el sumario que las mantenciones de la máquina se encontraban al día y efectuadas por personal autorizado, y que incluso la última de dichas mantenciones se realizó el mismo día, horas antes de la ocurrencia del accidente permiten concluir que su representada razonablemente adoptó todas la medidas necesarias para dar protección al trabajador.

Concluye este punto argumentando que su representada capacitó al trabajador en relación con el correcto uso de la máquina donde se produjo el accidente, que en estas capacitaciones se dio cuenta de la prohibición de intervención de las rejillas de seguridad y del procedimiento que debía adoptarse en casos de atascamiento de cartulina, que el trabajador contaba con todos los implementos de seguridad en relación con la actividad realizada y además la empresa realizó mantenciones periódicas a la máquina donde se produjo el accidente por lo que debe eximirse de responsabilidad al empleador, ya que su representada sí dio cumplimiento al deber de dar seguridad en la faena de trabajo y que la falla de sensor no se debió a la falta de mantención, sino que por el contrario se produjo por un hecho no imputable a su responsabilidad, ocurrido como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor, entendiendo estos como un hecho completamente imprevisible para su parte y por lo demás imposible de resistir, de forma que, contrariamente a lo señalado en la resolución impugnada, su parte dio íntegro cumplimiento a todas las normas vigentes en materia de seguridad, acompañándose en el sumario sanitario la totalidad de la documentación que da cuenta de estos hechos y cuyo detalle expone en su demanda.

Adicionalmente expresa que la sentencia impugnada debe invalidarse, por cuanto no cumplió con el requisito de todo acto administrativo, consistente en resolver y emitir pronunciamiento respecto de todas las defensa y peticiones efectuadas por los particulares, ya que no emitió pronunciamiento respecto de la defensa expuesta en el número 1 de su escrito de descargos por el cual se señalan la existencia de una serie de deficiencias contenidas en el acta levantada por la funcionaria de la Seremi



Foja: 1

de Salud, respecto de las cuales, la sentencia se limitó en su parte resolutive a “ratificar todo lo obrado por la Funcionaria Inspectora de la Secretaría Regional Ministerial”, lo que en ningún caso podría considerarse como un pronunciamiento y resolución a la defensa opuesta por su representada a este respecto.

Además, reclama que el acta levantada por la funcionaria de la Seremi no se ajusta a la normativa vigente, como tampoco al manual de fiscalización emanado del Ministerio de Salud, motivo por el cual su parte debe ser exonerada del sumario sanitario.

Puntualiza que el acta que levanta el funcionario del Seremi de Salud constituye un instrumento público, y su contenido fija los hechos que deberán ser investigados y ponderados en el sumario sanitario, del tal modo que si el referida acta no cumple con los requisitos legales impide el inicio y desarrollo del sumario, reiterando que el acta levantada en el presente caso no cumplió con los requisitos legales, como tampoco con el manual de procedimiento establecido por el Ministerio de Salud, por cuanto de su simple lectura se advierte que en ella no se hizo alusión a la o las eventuales infracciones a la normativa sanitaria presuntamente infringida, impidiendo que su representada tomara cabal conocimiento de las infracciones legales que se le imputan y que el hecho que haya formulado descargos en el sumario sanitario, presentando una serie de documentos como medio de prueba, no significa que las eventuales ilegalidades del acta no le hayan causado perjuicio, por cuanto el hecho de no conocer con exactitud las supuestas infracciones sanitarias que se le imputan afectan el derecho de defensa, el cual exige conocer con precisión los cargos que se formulan y en este sentido el sumario sanitario debe conocer infracciones a la legislación sanitaria y no “deficiencias en materia de higiene y seguridad”, las que no necesariamente constituyen una infracción a la normativa sanitaria, sin que tampoco se estableciera la forma cómo dichas deficiencias fueron percibidas por los sentidos de la fiscalizadora o los medios instrumentales que permitan su percepción, tal como lo ordena el manual de fiscalización, lo que también le resta valor al acta.



Foja: 1

En subsidio de lo anterior y en el evento que se considere que sí tuvo responsabilidad en el accidente sufrido por el trabajador, reclama respecto a la falta de fundamentación de la sentencia en cuanto al monto de la multa aplicada, la que si bien se encuentra dentro del rango de UTM establecido en el artículo 174 del Código Sanitario, omitió emitir pronunciamiento respecto de los fundamentos o circunstancias que se tomaron en consideración al momento de imponer una multa de 300 UTM, lo que infringe el principio de que los actos administrativos deben encontrarse debidamente fundados y motivados, impugnando finalmente dicha multa por que según indica, al momento de resolver el sumario sanitario y aplicar a su representada la multa de 300 UTM, no consideró la existencia de circunstancias atenuantes que la misma resolución reconoció en su favor, lo que implica un vicio que afecta la legalidad del acto administrativo.

Finalmente, refiere que no concurren ninguna de las circunstancias que menciona el artículo 171 del Código Sanitario para desechar la reclamación y que ésta se interpone dentro de plazo, por cuanto el plazo de 5 días para reclamar de la multa aplicada en el sumario se interrumpió con la interposición del recurso de reposición ante la autoridad sanitaria, comenzando a correr nuevamente una vez que se notifique la resolución que resuelve dicho recurso.

De esta forma, previa cita del artículo 171 del Código Sanitario solicita tener por interpuesto el reclamo en contra de la sanción contenida en la resolución exenta N° 001407, expediente N° 2948/2017, modificada y ratificada mediante resolución Exenta N°004970, de fecha 20 de Julio de 2018, ambas emanadas del Secretario Regional Ministerial del Salud de la Región Metropolitana, quién actúa bajo la personalidad jurídica del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado doña María Eugenia Manaud Tapia y, en definitiva, acoger la excepción de prescripción interpuesta o, en subsidio, acoger las restantes defensas y peticiones realizadas, dejando sin efecto la multa de 300 UTM o en subsidio, rebajar la cuantía de la multa a la cantidad que el Tribunal estime en derecho, con costas.



Foja: 1

Según consta a folio 7, con fecha 7 de diciembre de 2018 se notificó la demanda.

Luego, con fecha 14 de diciembre de 2018, se llevó a cabo el comparendo de contestación y conciliación con la comparecencia de ambas partes del juicio.

En dicha oportunidad la demandada contestó el libelo de marras por escrito solicitando su rechazo, con costas.

Funda su defensa señalando que con fecha 19 de julio de 2017, se constituyó un funcionario fiscalizador de la Secretaria Regional Ministerial de Salud, en la empresa ubicada en Los Lingues N° 751, comuna de Quilicura, de propiedad de la reclamante, realizando una visita inspectiva en atención al accidente laboral grave que afectó a don Paulo Andrés Tapia López, el día 17 de julio de 2017, a las 20:34 horas, al atraparse su mano izquierda en la máquina dimensionadora al momento de accionarla a una velocidad de marcha lenta con el objetivo de sacar un papel atascado en el cilindro de corte, que obligó a trasladarlo al Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad.

Detalla que de la investigación realizada, se pudo constatar en terreno las siguientes observaciones de Higiene y Seguridad:

1.- La máquina dimensionadora no funciona el sensor o dispositivo de seguridad en la rejilla donde intervino el trabajador para acceder al cilindro de corte.

2.- No existe registro por escrito de la inspección diaria en dimensionadora donde operaba el trabajador al momento del accidente.

3.- Procedimiento de trabajo seguro de la máquina dimensionado, elaborado en el año 2015, no considera todos los riesgos asociados al uso y mantención de la máquina en movimiento.

4.- No cuenta con registro actualizado de la capacitación efectuada al trabajador accidentado en la operación segura de la máquina dimensionadora.



Foja: 1

5.- Cuenta con informe de iluminación de fecha 31 de enero de 2017, emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, donde se indica que el puesto de trabajo de la dimensionadora de Pizzolato, los niveles de iluminación están bajo lo establecido en el D.S. 594/99 del Minsal, en la zona de tablero de comandos y salida de corte, máquina donde ocurrió el accidente y se comprueba que no se han implementado todas las medidas de prevención emitidas por la ACHS.

6.- Derecho a saber entregado al trabajador accidentado no considera todos los riesgos asociados al uso y operación de la máquina dimensionadora.

7.- No cuenta con lista de chequeo para verificación y mantención de máquina dimensionadora.

8.- No presenta registro de entrega de protector auditivo entregado al trabajador accidentado.

9.- No cuenta con programa de selección y control de equipos de protección personal.

10.- No presenta registro de capacitación teórico y práctico en el uso de protector auditivo del trabajador accidentado.

11.- El día 17 de julio de 2017, correspondiente al día que ocurrió el accidente, se realizó mantención preventiva a la máquina Pizzolato, sin embargo, no se efectuó reparación del sensor de seguridad.

12.- No presenta plan de prevención de riesgos año 2017, donde incluya el programa de seguridad de maquinarias con riesgo de atrapamiento.

Relata que por estos hechos, se citó al representante legal de la empresa a efectuar descargos, lo que hizo con fecha 28 de julio de 2017.

Agrega que la empresa sumariada fue sancionada, por cuanto los hechos constituyen una infracción a lo dispuesto en los artículos 3, 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S. 594/99 del Ministerio de Salud, sin



Foja: 1

que ésta lograra desvirtuar los cargos formulados para eximirse de la responsabilidad que le cabe en los hechos materia del sumario.

Señala que, consta en la sentencia sanitaria, que el Seremi emitió argumentos por los cuales dio por establecida las infracciones sanitarias y, a la vez, analizó los argumentos de la parte reclamante, por lo que se ha dado pleno cumplimiento al debido proceso. En este sentido, refiere que los sumarios sanitarios son procedimientos administrativos especiales, que tienen por objeto investigar y sancionar las infracciones a la normativa sanitaria, pero no son un procedimiento adversarial judicial si no que se da el derecho a la parte de hacer sus descargos.

Explica que la resolución N°001407 de fecha 7 de febrero de 2018 determinó que se aplicara a Vera y Giannini Impresores S.A., legalmente representada por don Jan Socha Valco, una multa de 600 UTM, en tanto la resolución N°004970 de fecha 20 de julio de 2018, que resuelve la reposición deducida por la reclamante en contra de la resolución n° 001407, señaló que “Se tendrá en consideración la oportunidad en que la sumariada adoptó una serie de medidas correctivas, concernientes a la contingencia laboral suscitada, relacionada con el accidente laboral que afectó al trabajador don Paulo Andrés Tapia López. A la sazón entonces palmariamente, y en uso de las facultades con que cuenta esta Autoridad Sanitaria para reevaluar la procedencia de las sanciones aplicadas en el marco de los sumarios sanitarios tramitados por esta Secretaría, se estima procedente la mencionada reconsideración. En consecuencia, se procederá a rebajar la multa...a 300 UTM (trescientas unidades tributarias mensuales) ...”.

De manera que, las únicas consideraciones que hicieron posible la rebaja de la multa realizada por la autoridad sanitaria, dicen relación a hechos posteriores al acaecimiento del accidente por el cual se le aplica la sanción, lo que trajo como consecuencia la rebaja de 600 UTM a 300 UTM, por tanto señala que la reclamante no posee agravio alguno para efectos de interponer esta acción que tiene como fin dejar sin efecto la multa sanitaria u obtener una nueva rebaja de la misma.



Foja: 1

Sostiene que en la reclamación judicial la empresa no aporta ningún antecedente que desvirtúe los hechos constatados en acta de fiscalización, ni tampoco aporta prueba que desmienta lo señalado en dicha acta, y que aquellos hechos fueron debidamente ponderados al igual que los descargos de la reclamante según se desprende de la sola lectura de la sentencia sanitaria, y luego de un análisis de las alegaciones y los elementos de convicción aportados se consideró que no debía eximirla de responsabilidad en los hechos imputados.

Refiere que lo que la reclamante cuestiona directamente es la motivación del acto administrativo, lo que se ha cumplido plenamente, ya que como se ha señalado, la motivación del acto administrativo consiste en “manifestar la razón que se ha tenido para dictarlo”, o en otras palabras “es la manifestación externa de la causa, motivo y fin, que revela externamente lo que el acto persigue”. Por ello, la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, establece que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de particulares” (art. 11 inciso 2), como asimismo que “las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada” (art. 41 inciso 4°. Pero basta que la motivación sea sucinta y suficiente para que se puedan conocer los motivos, no que se recojan todos y cada uno de los antecedentes que formaron parte del iter procedimental que concluyó con el acto administrativo de término, en otras palabras la motivación se cumple, “con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho”.

Indica además que el artículo 166 del Código Sanitario ha establecido el carácter de plena prueba del acta levantada por funcionario competente respecto de la infracción a las leyes y reglamentos sanitarios que en ella se consignan y que fuera debidamente comprobada por el funcionario fiscalizador, conforme lo establece expresamente el artículo 166 del Código Sanitario, en relación al artículo 156 inciso segundo del mismo cuerpo legal, que le confiere el carácter de Ministro de Fe al funcionario que practique la diligencia señalada.

De esta forma, indica que los hechos que han motivado la sanción se encuentran plenamente comprobados en el sumario sanitario instruido en



Foja: 1

conformidad a las normas del Código Sanitario; que los hechos claramente consignados por el Ministro de fe y no desvirtuados por la sumariada constituyen efectivamente una infracción a lo dispuesto en los artículos 3, 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, aprobado por D.S 594/99 del Ministerio de Salud, y que lo que se sancionó conforme a la multa establecida en la parte resolutive y que corresponde a 300 U.T.M., corresponde a la infracción cometida, en consecuencia, la carga de la prueba en la presente reclamación judicial recae en la demandante, debiendo ella acreditar que los hechos que motivaron la sanción no se encuentren comprobados en el sumario sanitario instruido al efecto en conformidad a las normas del Código Sanitario; que tales hechos no constituyen una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios; y que la sanción aplicada no corresponde a la infracción cometida.

Asimismo, puntualiza que la Sentencia N° 004970 de fecha 20 de julio de 2018 que aplicó una multa de 300 UTM a la empresa infractora se ajusta a lo dispuesto por el artículo 174 del Código Sanitario, atendido que por una parte, la empresa ha incurrido en transgresión a lo dispuesto en el Reglamento Sanitario y, en segundo lugar, considerando que el monto máximo de multa aplicable en conformidad a la ley asciende a 1.000 UTM, de manera que aquella que en definitiva se aplicó en la especie, se ajusta perfectamente a la entidad de la infracción cometida.

En cuanto a la excepción de prescripción planteada por la reclamante manifiesta que existe una clara confusión de aquella respecto de la institución de la prescripción, dado que se funda en normas jurídica que no indica con precisión, realiza el cómputo de plazos desde momentos diferentes, y confunde instituciones de carácter legal o jurisprudencial.

En primer lugar, manifiesta que la Jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia, ha señalado que en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, la “acción fiscalizadora”, prescribe en el plazo de seis meses (tomando como consideración lo establecido en el artículo 97 del Código Penal en relación a la faltas) o en el plazo de 5 años (en virtud de lo establecido en el artículo 2515 del Código Civil) y para efectos de



Foja: 1

realizar el cómputo del plazo de prescripción de la acción fiscalizadora, los tribunales han señalado que este comienza a correr desde el acaecimiento de la infracción administrativa hasta el momento en que se da inicio al procedimiento administrativo sancionador.

De esta forma, el acto por medio del cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador, suspende el plazo de prescripción antes indicado, para las dos hipótesis señaladas, tanto en el caso de que se considere un plazo de seis meses o de cinco años.

En especial, tomando en consideración lo indicado en el artículo 96 del Código Penal, que establece “Esta prescripción... se suspende desde que el procedimiento se dirige contra él”.

Argumenta que posterior al inicio del procedimiento operaría una institución diversa a la prescripción de la acción fiscalizadora, que ha sido creada por la Jurisprudencia, consistente en el “decaimiento del procedimiento administrativo sancionador” y para efectos de que se desencadene el decaimiento se estableció el plazo de 2 años, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 19.880, plazo que comenzaría a regir desde el inicio del procedimiento administrativo, el cual sería interrumpido el día en que se dicte la resolución que impone la multa. Si desde el inicio del procedimiento sancionador ha transcurrido el plazo de dos años sin que se imponga una sanción administrativa, el procedimiento decae.

Indica que en el presente caso no ha operado la prescripción de la “acción fiscalizadora” ni el “decaimiento del procedimiento administrativo”, ya que, en efecto la infracción administrativa, es decir el accidente que sufrió don Paulo Andrés Tapia López, acaeció el 17 de julio de 2017 y luego, el acta de inspección por medio del cual se da inicio a este procedimiento administrativo sancionador, es de fecha 19 de julio de 2017, y la resolución exenta que impone la sanción administrativa que establece la multa, es de fecha 7 de febrero de 2018, por lo tanto, no se ha producido la prescripción de la acción fiscalizadora, ya que el plazo se suspendió dos días después de acaecida la infracción administrativa, por medio del acta de inspección levantada por el funcionario fiscalizador de la Seremi de Salud,



Foja: 1

ni menos aún se ha producido el decaimiento del procedimiento administrativo, ya que no ha transcurrido el plazo de dos años contados desde la fecha del acta de inspección hasta el momento en que se impone la sanción.

En cuanto a la falta de responsabilidad de la reclamante, ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor sostiene que en el derecho común, la culpa se mide mediante un esquema legal abstracto de conducta, establecido en el artículo 44 del Código Civil, que exige un deber de cuidado mayor en el cumplimiento de las obligaciones contraídas a la parte de un contrato que obtiene el mayor provecho; el mayor grado de cuidado en el cumplimiento del contrato se exige a la parte que reporta todo el beneficio contractual, y sólo se exige una mínima diligencia a quien no obtiene provecho alguno del contrato.

Agrega que esto y las consideraciones propias del Derecho del Trabajo, han hecho que la jurisprudencia haya resuelto que al empleador se le exige la diligencia más severa del ordenamiento jurídico (culpa levísima: la falta de aquella diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes) en el cuidado de la salud y vida de sus trabajadores, y que esta obligación del empleador, instituida además en el texto expreso en el artículo 184 del Código del Trabajo, es considerablemente amplia, morigerada únicamente por la imprudente exposición al riesgo por parte del trabajador y el caso fortuito o fuerza mayor, circunstancias ambas de calificación estricta, ya que la jurisprudencia ha exigido de las empresas un cuidado efectivo de la salud y seguridad de sus trabajadores, no sólo cumpliendo las obligaciones legales más evidentes de entregar implementos de seguridad y dar capacitación adecuada: el cuidado debido debe incluir medidas de prevención específicas y efectivas, cuestión que no ha ocurrido en el presente caso.

Finalmente, respecto a la petición subsidiaria de rebaja del monto de la multa aplicada por la Seremi de Salud R.M, solicita su rechazo expresando que el artículo 171 del Código Sanitario, ubicado dentro del Libro X, Título II, constituye una vía especial de reclamación, establecida exclusivamente como un medio para dejar sin efecto sentencias sanitarias



Foja: 1

que aplican sanciones, las cuales a su vez, son el resultado de un proceso público contradictorio en el cual se otorga audiencia a la parte sancionada, el que conocemos como Sumario Sanitario.

Al respecto, dispone el artículo 170 del Código Sanitario que: “La clausura y demás medidas sanitarias ordenadas en la sentencia no podrán dejarse sin efecto o suspenderse a menos que el Director General de Salud así lo ordenare, o que lo dispusiera la justicia ordinaria al fallar por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria, la reclamación que se interponga.”.

De esta forma, señala que el artículo 171 antes mencionado, consigna que “De las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y sumaria. El tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del presente Código, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida”, mientras que el artículo 172 preceptúa que “las sentencias que dicte la autoridad sanitaria podrán cumplirse no obstante encontrarse pendiente la reclamación a que se refiere el artículo anterior, sin perjuicio de lo que por sentencia definitiva ejecutoriada o que cause ejecutoria resuelva la justicia ordinaria al pronunciarse sobre aquélla.”

Conforme a las normas que transcribe, alega que éstas confieren competencia al juez ordinario civil exclusivamente para conocer de la reclamación contenciosa administrativa especial en contra de la sentencia que aplica una sanción administrativa y permite a la judicatura ordinaria únicamente dejar sin efecto o suspender la sanción, más de ninguna forma se admite modificarla o fijar una sanción distinta de la aplicada por la autoridad sanitaria y resolver lo contrario, aceptando la posibilidad de rebajar la multa impuesta, equivaldría a vulnerar lo dispuesto en el artículo 7° de la Constitución Política de la República que bajo sanción de nulidad, prohíbe a cualquier magistratura atribuirse otra autoridad o derechos –ni



Foja: 1

aun a pretexto de circunstancias extraordinarias- que aquellos expresamente por la Constitución o la ley conferidos, violentando además el principio de separación de poderes al mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos, contrariando el artículo 4° del Código Orgánico de Tribunales.

A continuación, se tuvo por contestada la demanda en los términos señalados y se llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo.

Luego, por resolución de fecha 27 de diciembre de 2018 se recibió la causa a prueba, modificada por resolución de fecha 14 de junio de 2019, rindiéndose la que consta en autos.

Finalmente, encontrándose la causa en estado, con fecha 14 de enero de 2020, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la excepción de prescripción:

PRIMERO: Que, en primer lugar, la reclamante interpone en contra del procedimiento seguido respecto de su representada y de la multa aplicada, la excepción de prescripción, citando al artículo 27 de la ley de Bases de los Procedimientos Administrativos y lo dispuesto en el Código Penal, que dispone que las faltas prescriben en el plazo de 6 meses contados desde la comisión del hecho respectivo, fundado en que la supuesta infracción se constató el 19 de Julio de 2017, disponiéndose la instrucción del sumario sanitario en igual fecha y que la resolución recaída en dichos autos se dictó recién con fecha 7 de Febrero del 2018, esto es después de cumplido el plazo de 6 meses de constatada la supuesta infracción, por lo que debe operar entonces la prescripción.

SEGUNDO: Que, la reclamada solicitó el total rechazo de la excepción sosteniendo que en el ámbito del Derecho Administrativo Sancionador, la “acción fiscalizadora”, prescribe en el plazo de seis meses (tomando como consideración lo establecido en el artículo 97 del Código Penal en relación a la faltas) o en el plazo de 5 años (en virtud de lo establecido en el artículo 2515 del Código Civil) y que dicho plazo comienza a correr desde la ocurrencia de la infracción administrativa hasta



Foja: 1

el momento en que se da inicio al procedimiento administrativo sancionador, toda vez que con el inicio de este procedimiento administrativo se suspende el plazo de prescripción antes indicado, para las dos hipótesis señaladas.

TERCERO: Que, en primer lugar, en cuanto a la excepción de prescripción del procedimiento planteada por la reclamante, efectivamente constituye una solicitud improcedente en la forma en que fue consignada en el libelo, ya que de acuerdo a los fundamentos señalados por la empresa reclamante en su solicitud, más bien se asemeja a una petición de declaración de decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, circunstancia que a la luz de los antecedentes de autos tampoco es posible de vislumbrar, toda vez que entre la fecha en que se dio origen al procedimiento administrativo el 19 de Julio de 2017 con la instrucción del sumario sanitario y la fecha en que en dicho procedimiento se dictó la resolución correspondiente (el 7 de Febrero del 2018) no transcurrió el plazo de 2 años, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 19.880.

CUARTO: Que, ahora, en relación a la prescripción alegada de la multa aplicada, atendido que el Código Sanitario no contiene ninguna norma relativa a esta prescripción, ante dicho silencio, debe determinarse si ella es o no procedente en estos casos, y, para dilucidar esta primera cuestión planteada, ha de tenerse en consideración que en el orden jurídico la imprescriptibilidad constituye una excepción y como tal, requiere de norma expresa que así lo declare, disposición que no existe en esta clase de materias, en consecuencia, éstas siguen la regla general, y por consiguiente, como forma de consolidación de las relaciones jurídicas, debe admitirse la prescripción como modo de extinguir la responsabilidad del caso.

QUINTO: Que, ha de señalarse primero que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales, y se encuentra tratada en el Código Civil, en los artículos 2492 y siguientes.



Foja: 1

Que, esta institución jurídica en su carácter extintivo o liberatorio, permite la estabilidad de los derechos dando seguridad jurídica y, en definitiva se constituye en un castigo para el actor negligente que no hace valer sus derechos en el tiempo que fija la ley y que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 2514 del Código Civil, la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos, exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, agregando el inciso segundo del mismo artículo que dicho tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible.

SEXTO: Que, de esta forma, considerando que la interposición del presente reclamo, acarrea necesariamente la suspensión del cobro de la multa impuesta por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana en contra de la empresa reclamante, el cobro de esta obligación no puede ser aún exigible, por lo que, la ausencia de este elemento fundamental para el análisis de esta excepción, como lo es la exigibilidad de la multa impuesta, impide el cómputo de cualquiera que sea el plazo de prescripción aplicable en la especie, circunstancia que conduce al rechazo de esta excepción, como se dirá en lo resolutivo.

En cuanto al fondo:

SÉPTIMO: Que, con fecha 21 de septiembre de 2018, compareció don Luis Fernando Bas González, factor de comercio, en representación de Vera y Giannini Impresores S.A., sociedad del giro de su denominación, e interpuso reclamo en contra de la resolución exenta N° 001407, de fecha 07 de Febrero de 2018, que aplicó una multa administrativa ascendente 600 UTM, y que fuera rebajada a 300 UTM mediante resolución N°004970, de fecha 20 de Julio de 2018, dictadas en el Sumario Sanitario N°2948-2017 notificado a su parte con fecha 12 de septiembre de 2018, dictada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y para efectos del proceso, en contra del Fisco de Chile, representado por su presidenta doña María Eugenia Manaud Tapia, en razón de los antecedentes de hecho y derecho que fueran expresados en el exordio de esta sentencia, los que, en definitiva, le conducen a solicitar dejar sin efecto la multa o, en subsidio, rebajarla.



Foja: 1

OCTAVO: Que por su parte, la demandada solicitó el total rechazo de la demanda conforme a las consideraciones expresadas en la parte expositiva del fallo.

NOVENO: Que, de lo expresado por las partes en sus escritos de la fase de discusión, es posible asentar como un hecho pacífico en este juicio que la reclamante fue sujeto de un procedimiento administrativo de fiscalización, que derivó en sancionatorio, de parte del ente reclamado el que culminó, con el dictamen impugnado que, aplicó finalmente a la actora una multa de 300 U.T.M.

DÉCIMO: Que, así las cosas y dado el contenido de la controversia en examen y la naturaleza de la acción en estudio, corresponde al tribunal determinar si la sanción impuesta a la reclamada se ajusta o no a lo previsto en el artículo 171 inciso 2° del Código Sanitario. En otras palabras, si los hechos que motivan la sanción se encuentran comprobados en el sumario sanitario, de acuerdo a las normas del Código Sanitario, si tales hechos acreditados en el sumario sanitario constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida.

UNDÉCIMO: Que, a fin de acreditar sus asertos la parte demandante allegó al proceso la siguiente prueba instrumental, libre de objeción contraría:

1. Copia de la resolución exenta N° 001407.
2. Copia de la resolución exenta N° 004970 y constancia de su notificación.
3. Copia del escrito de descargos formulado por la reclamante en el procedimiento administrativo.
4. Copia de recurso de reposición presentado por la reclamante en el procedimiento administrativo respecto de la resolución exenta N° 001407 emitida por la SEREMI, de fecha 07 de Febrero de 2018.



Foja: 1

5. Libro de registro de las mantenciones mecánicas efectuadas a las máquinas utilizadas por Vera y Giannini Impresores S.A. incluida la Pizzolato del año 2017.
6. Set de 8 copias de pantalla o fotografías obtenidas de la cámara de video que registró la ocurrencia del accidente el día 17 de julio de 2018.
7. Piezas del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Vera y Giannini Impresores S.A. vigente desde el 02 de mayo de 2013, (i) Libro I, Título VII, De las Obligaciones, Art.20, N°23. (ii) Libro II, Art.12, 16, 21, 27 N°4 Título III Obligaciones del Trabajador en Prevención, Higiene y Seguridad. (iii) Libro II, Art. 54 N°23 y N°26, Art.93, Título Del listado de riesgos.
8. Recepción de Anexo del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Vera de Giannini Impresores S.A. por parte del Sr. Pablo Tapia con fecha 04 de diciembre del año 2016.
9. Contrato de trabajo suscrito con fecha 16 de febrero de 2015 entre el prevencionista de Riesgos Sr. Ramón Ernesto Valenzuela Catalán y Vera y Giannini Impresores S.A.
10. Resolución emitida por el Sub departamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos de la SEREMI en respuesta a la solicitud N°30278 presentada por don Ramón Ernesto Valenzuela Catalán con fecha 17 de junio de 2011, señalando que el Sr. Valenzuela ha quedado inscrito como experto en Prevención de Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
11. Carta emitida por Ramón Valenzuela en representación de Vera y Giannini Impresores S.A. dirigida a la Inspección Comunal del Trabajo Norte Chacabuco, fecha 03 de abril de 2017, haciendo entrega de documentación que acredita la constitución del Comité Paritario por el periodo 2017-2019.
12. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 04 de abril de 2017.



Foja: 1

13. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 04 de mayo de 2017.
14. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 06 de junio de 2017.
15. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 03 de julio de 2017.
16. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 08 de agosto de 2017.
17. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 08 de septiembre de 2017.
18. Acta de Reunión de Comité Paritario de fecha 17 de octubre de 2017.
19. Libro de actas titulado “Entrega de EPP” a los trabajadores de Vera y Giannini en cuya página 49 se da cuenta que a don Pablo Andrés Tapia con fecha 6 de marzo de 2017 de le hizo entrega de sus guantes de seguridad para efectuar sus labores.
20. Presentación de Power Point titulado “Obligación de Informar Art. 21 al 23 DS 40, Art. 184 del Código de Trabajo.
21. Formulario de Notificación Inmediata de Accidente del Trabajo Fatal y Grave del Ministerio de Salud donde se informa por el Sr. Manuel Alcalde González el accidente del Sr. Pablo Andrés Tapia López ocurrido el 17 de julio de 2017 .
22. Copia de acta de audiencia de juicio celebrada ante el 1º Juzgado del Trabajo de Santiago, RIT: O-2127-2018, seguido entre don Paulo Tapia López y la reclamante producto del accidente laboral sufrido, que da cuenta del avenimiento suscrito entre las partes, producto del cual el Sr. Tapia recibió una indemnización ascendente a \$30.252.000 y \$3.652.000, como indemnización por término de la relación laboral.
23. Finiquito suscrito entre don Paulo Tapia López y la reclamante de fecha 30 de Octubre de 2018.
24. Acta fiscalización Funcionaria Seremi de Salud, de fecha 19 de Julio de 2017.



Foja: 1

25. Set de 24 fotografías de la máquina Pizzolato, correspondiente al equipo donde se produjo el accidente y set de 2 fotografías del polerón utilizado por los trabajadores de la reclamante.
26. Investigación del accidente de fecha 17 de julio de 2017 del Sr. Paulo Andrés Tapia López efectuado por el Comité Paritario Higiene y Seguridad de Vera y Giannini, firmado por los miembros del Comité.
27. Declaración efectuada -dentro de la investigación realizada por la ACHS- por el Sr. Manuel Alberto Sarabia Barraza como testigo indirecto del accidente de fecha 17 de julio de 2017.
28. Registro Actividad de Entrenamiento relativa a los riesgos asociados a la exposición al ruido en puesto de trabajo de fecha 22 de mayo de 2015, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
29. Registro de actividad de entrenamiento, denominado “Difusión procedimiento maquina Cortadora” de fecha 26 de mayo de 2015, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
30. Registro de actividad de capacitación “Charla 5 minutos, dan a conocer indicaciones operativas respecto a pilas impresas y protección de estas, se entrega política de calidad y descripción de cargo, autocontrol (intervención de máquina)”, de fecha 18 de abril de 2016, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
31. Registro de actividad de entrenamiento, “Charla – Capacitación, autocuidado, trabajo seguro, uso EPP” de fecha 12 de enero de 2017, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
32. Registro de actividad de entrenamiento, “Charla y entrega de política de calidad, autocuidado, autocontrol”, de fecha 27 de abril de 2017, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
33. Registro de actividad de entrenamiento, “Charla 5 minutos, Norma HACCP Y BPM, Uso EPP” de fecha 11 de mayo de 2017, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.



Foja: 1

- 34.Registro de actividad de entrenamiento “Pausa Activa, ejercicios libres en puesto de trabajo”, de fecha 12 de junio de 2017, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
- 35.Registro de actividad de entrenamiento “Charla 5 min, 10 principios básicos de seguridad campaña no más amputados”, de fecha 05 de junio de 2017, donde consta la firma del Sr. Paulo Tapia López.
- 36.Copia de folleto con los 10 principios de seguridad efectuados por la Asociación Chilena de Seguridad, entregados a los trabajadores que participaron en la Charla.
- 37.Formulario de recepción de elementos de protección personal “Tapones Auditivos” donde consta que con fecha 21 de enero de 2017, el Sr. Paulo Tapia López recepcionó los elementos de protección personal “tapones auditivos”.
- 38.Certificado de conformidad N°139 emitido por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad donde se certifica que la empresa Treck S.A. es titular de la Marca de Conformidad Cesmec desde el 10 de marzo de 2015, relativo a los zapatos de seguridad que el empleador entrega a sus trabajadores.
- 39.Informe Técnico N°0701/2012 emitido por Cal-tex Limitada de fecha 24 de abril de 2012, correspondiente a la calidad de los guantes de protección marca Legend, que el empleador entrega como E.P.P. a sus trabajadores.
- 40.Carta emitida por la Asociación Chilena de Seguridad a Vicsa Safety Comercial Limitada de fecha 15 de enero de 2016 validando los tres modelos de tapones protectores auditivos indicados en el documento, que el empleador entrega como E.P.P. a sus trabajadores.
- 41.Formulario de Medidas Inmediatas emitido por la Asociación Chilena de Seguridad donde se instruye al Sr. Ramón Valenzuela, representante de Vera y Giannini Impresores S.A. a implementar 6 medidas de manera inmediata, con motivo del accidente del trabajo.



Foja: 1

42. Informe técnico titulado “Control de cumplimiento” Folio N°891077 emitido por la Asociación Chile de Seguridad donde se certifica que las seis medidas correctivas prescritas a Vera y Giannini Impresores S.A. luego del accidente del Sr. Paulo Tapia López fueron implementadas, suscrito por Cristian Carrasco, experto red Asociación Chilena de Seguridad.
43. Registro Charla de Inducción Trabajador Nuevo, obligación de informar, Art 21 D.S. N°40 de fecha 27 de abril de 2015 del Sr. Paulo Tapia López.
44. Denuncia individual de accidente del trabajo de la Asociación Chilena de Seguridad efectuada por el Sr. Ramón Ernesto Valenzuela Catalán.
45. Currículum Vitae del Sr. Paulo Andrés Tapia López, del mes de abril de 2015, donde consta la experiencia que tenía como maestro guillotina.
46. Contrato de trabajo suscrito con fecha 02 de mayo de 2015 entre Paulo Tapia López y Vera y Giannini Impresores S.A.
47. Política de Prevención de Riesgos de Vera y Giannini Impresores S.A. aprobada con fecha 18 de agosto de 2014.
48. Procedimiento, Selección y Control de Elementos de Protección Personal de Vera y Giannini Impresores S.A. del año 2016, firmada por el representante legal.
49. Programa de protección auditiva de Vera y Giannini Impresores S.A. del año 2015- 2016.
50. Informe Empresa emitido por la Asociación Chilena y Seguridad sobre Verificación y Control Higiene Industrial, Agente Iluminación, de Vera y Giannini Impresores S.A.
51. Procedimiento de Trabajo Seguro. Máquina Cortadora de Vera y Giannini Impresores S.A. del año 2015.
52. Copia de Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad al Sr. Paulo Tapia López con fecha 27 de abril de 2015.



Foja: 1

53.Recepción de Reglamento Interno de Vera y Giannini Impresores S.A. por parte de la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana con fecha 08 de mayo de 2013.

54.Libro de Registro de las mantenciones eléctricas efectuadas a las máquinas utilizadas por Vera y Giannini Impresores S.A incluida la Pizzolato de los años 2016, 2017 y 2018.

55.Libro de registro de las mantenciones mecánicas efectuadas a las máquinas utilizadas por Vera y Giannini Impresores S.A. incluida la Pizzolato del año 2017.

56. Copia del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente en la empresa a la fecha del accidente.

DUODÉCIMO: Que, igualmente, el actor provocó la prueba testimonial de los testigos don Manuel Guillermo Alcalde González y don Jan Socha Calvo, quienes según consta en las actas de fecha 30 de julio de 2019 y 21 de agosto del mismo año, sin tachas, debidamente juramentados y legalmente examinados declararon al tenor del punto 1 de prueba.

DÉCIMO TERCERO: Que, por su parte la demandada acompañó únicamente la digitalización del expediente del Sumario Sanitario N° 2948 del año 2017, sin objeción de la actora.

DÉCIMO CUARTO: Que, conforme a lo anterior, cabe referirse a los hechos que consignados en el acta N°0140913 contenida en el expediente 2948-2017 acompañado por la demandada, es decir, los siguientes:

1. El 19 de julio de 2017 el trabajador Paulo Andrés Tapia López sufrió un accidente a las 20:34 horas aproximadamente en circunstancias que éste revisaba la máquina dimensionadora Pizzolato, que consiste en pasar la bobina de cartulina para dimensionarla a pliego, procedió a accionarla a una velocidad de marcha lenta con el objetivo de sacar un papel atascado en el cilindro de corte, siendo atrapada su mano izquierda, sufriendo la amputación traumática de los dedos índice, medio, anular y meñique



Foja: 1

de su mano izquierda debiendo luego acudir el jefe de turno para proceder al traslado del trabajador al Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad.

2. Se debió mover la rejilla de protección del cilindro de corte, sin funcionar el dispositivo de emergencia (sensor).
3. Se detectaron como deficiencias en materia de Higiene y Seguridad las siguientes:
 - a) La máquina dimensionadora no funcionó el sensor o dispositivo de seguridad en la rejilla donde intervino el trabajador para acceder al cilindro de corte.
 - b) No existe registro por escrito de la inspección diaria en dimensionadora donde operaba el trabajador al momento del accidente.
 - c) Procedimiento de trabajo seguro de la máquina fue elaborado en el año 2015 y no considera todos los riesgos asociados al uso y mantención de la máquina, asimismo, una instrucción clara del operador de intervenir la máquina en movimiento.
 - d) No cuenta con registro actualizado de la capacitación efectuada al trabajador accidentado en la operación segura de la máquina dimensionadora.
 - e) Cuenta con informe de iluminación N°665853 de fecha 31 de enero de 2017 emitido por la Asociación Chilena de Seguridad, donde se refiere que los niveles de iluminación del puesto de trabajo de la dimensionadora están bajo lo establecido en el D.S 594/99 en la zona de tablero de comandos y salida de corte de la máquina donde ocurrió el accidente y se comprueba que no se han complementado todas las medidas de prevención emitidos por la ACHS.
 - f) Derecho a saber entregado al trabajador accidentado y no considera todos los riesgos asociados al uso y operación de la máquina dimensionadora.
 - g) No cuenta con lista de chequeo para verificación y mantención de máquinas dimensionadora.
 - h) No presenta registros de entrega de protector auditivo entregado



Foja: 1

al trabajador.

- i) No cuenta con programa de selección y control de equipos de protección personal.
- j) No presenta registro de capacitación teórica y práctica en el uso de protector auditivo del trabajador accidentado.
- k) El día 17 de julio de 2017 (día del accidente) se realizó mantenimiento preventiva a la máquina dimensionadora Pizzolato, sin efectuarse reparación del sensor de seguridad.
- l) No presenta plan de prevención de riesgos año 2017, donde incluya el programa de seguridad de maquinarias con riesgo de atrapamiento.

Por otro lado, la resolución exenta N°1407 reclamada en autos hace eco de lo consignado en la respectiva acta y a juicio de este tribunal lo hace con razón, pues, los hechos consignados en los numerales 1, 2 y 3 letra a) se pueden dar por pacíficos y luego según las probanzas acompañadas al expediente administrativo sancionatorio y también en este proceso, si bien los documentos aparejados en esta causa permiten desechar las imputaciones planteadas en las letras g), h) e i) del numeral tercero antes mencionado, no permiten descartar la efectividad de las deficiencias establecidas en los restantes puntos del numeral 3° detallado precedentemente, atendida la antigua data de los procedimientos de trabajo seguro con los que contaba la empresa, y considerando que si bien se acompañó actas de entrega de elementos de protección personal (auditivos y guantes), no desvirtúa el mérito de lo consignado, pues la ausencia de estos elementos dice relación con el momento específico de la ocurrencia del accidente, lo que no se acreditó con medios de prueba suficientes en este proceso.

Finalmente, es menester tener presente en cuanto a la totalidad de estos hechos que el artículo 166 del Código Sanitario prescribe que *“basta para dar por establecida la existencia de una infracción a las leyes y reglamentos sanitarios el testimonio de dos personas contestes en el hecho y sus circunstancias esenciales; o el acta, que levante el funcionario del Servicio para comprobarla”*, siendo la actividad probatoria desplegada por la reclamante insuficiente para efectos de desvirtuar la presunción de veracidad de que gozan los hechos constatados por el ministro de fe al momento de



Foja: 1

elaborar el acta donde constan las circunstancias del accidente y la infracción a las medidas de higiene y seguridad que fueron constatadas en su oportunidad.

Asimismo, cabe señalar que de acuerdo a lo que se planteó en el recurso de reposición interpuesto por la reclamante en contra de la resolución exenta 1407 en sede administrativa y que fue debidamente ponderado y considerado para rebajar mediante la resolución exenta 4970 la multa impuesta a la reclamante, ésta adoptó luego del accidente sufrido por el trabajador Paulo Tapia López una serie de medidas correctivas por causa de aquella contingencia, lo que fue tenido en cuenta por la autoridad sanitaria para rebajar la sanción a la mitad y que de igual forma constituye un reconocimiento de la reclamante de autos a las deficiencias constatadas.

DÉCIMO QUINTO: Que, asentado lo anterior en cuanto a los presupuestos facticos, corresponde avanzar en el análisis señalado al considerando cuarto y determinar si acaso tales hechos acreditados en el sumario sanitario constituyen efectivamente una infracción a las leyes o reglamentos sanitarios. Para tal efecto es necesario tener presente que, luego de sus consideraciones, la entidad reclamada concluye que los hechos consignados constituyen una infracción a lo dispuesto por los artículos 3,37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Los Lugares de Trabajo.

A saber, la primera norma aludida establece *que “La empresa está obligada a mantener en los lugares de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores que en ellos se desempeñan, sean éstos dependientes directos suyos o lo sean de terceros contratistas que realizan actividades para ella.”*

Por su parte, el artículo 37 dispone que *“Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores.*

Todos los locales o lugares de trabajo deberán contar con vías de evacuación horizontales y/o verticales que, además de cumplir con las exigencias de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan de salidas en número, capacidad y ubicación y con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita salida de



Foja: 1

todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Estas salidas podrán mantenerse entornadas, pero no cerradas con llave, candado u otro medio que impida su fácil apertura.

Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias.

Además, deberá indicarse claramente por medio de señalización visible y permanente la necesidad de uso de elementos de protección personal específicos cuando sea necesario.

Los símbolos y palabras que se utilicen en la señalización, deberán estar de acuerdo con la normativa nacional vigente, y a falta de ella con la que determinen las normas chilenas oficiales y aparecer en el idioma oficial del país y, en caso necesario cuando haya trabajadores de otro idioma, además en el de ellos.”

Por otro lado el artículo 53 del mismo cuerpo normativo, prescribe que “*El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de todo costo y cualquiera sea la función que éstos desempeñen en la empresa, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo.*”

DÉCIMO SEXTO: Que, del dialogo armónico de las disposiciones transcritas se evidencia que el empleador, por un lado, tiene el deber instar por la supresión en los lugares de trabajo de cualquier factor de peligro que pudiese afectar a la salud o integridad física de los trabajadores y, además, proporcionar a estos los elementos de protección personal y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo. Siendo las normas de los artículos 3° y 37 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Los Lugares de Trabajo un marco del deber general de seguridad que pesa sobre el empleador y, luego, el artículo 53 de dicho



Foja: 1

cuerpo normativo una manifestación concreta de dicho deber referida principalmente a proporcionar los elementos de protección personal y la capacitación necesaria, se evidencia una vinculación normativa entre los hechos constatados y el deber de conducta establecido por la norma, siendo ineludible concluir, por tanto, que efectivamente los hechos acreditados constituyen una infracción a las normas invocadas por la entidad reclamada.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, finalmente en la especie, no queda más que concluir que se ha verificado lo prevenido en el artículo 171 en relación al artículo 166, ambos del Código Sanitario, puesto que se han acreditado los hechos fiscalizados y tales hechos constituyen infracción sanitaria, encontrándose la multa impuesta dentro del rango que contempla el artículo 174 del indicado Código, por lo que la reclamación deducida en autos habrá de ser desestimada en su petición principal en que se solicita ser eximido de la multa impuesta.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en nada altera lo razonado hasta este punto el hecho de que el accidente haya sido calificado como uno de carácter grave pues dicha calificación no es la que motiva la aplicación de la multa cuya exención fue requerida a lo principal, sino –como se ha dicho– la infracción a las disposiciones reglamentarias tratadas en su oportunidad, de manera que dicha calificación de gravedad no repercute, al menos por atribución normativa, ni en la aplicación de la respectiva multa ni su graduación.

Igual razonamiento aplica respecto de la conducta del trabajador, en tanto su exposición imprudente o no al peligro, no exime al reclamado del cumplimiento de los deberes que en virtud de los reglamentos aplicables le pesan. Por otro lado, en la especie no se analiza la eventual responsabilidad civil contractual de uno u otro sujeto, si no que la legalidad del ejercicio de las facultades sancionatorias de un ente administrativo, de manera que la norma invocada al efecto no recibe aplicación y, en todo caso, resulta impertinente desde que los fines de la responsabilidad civil dicen relación con la reparación y el restablecimiento de desequilibrios patrimoniales entre los sujetos y la facultad sancionadora en examen en autos dice relación con la tutela de los fines encomendados por el artículo 67 del Código Sanitario al servicio reclamado.



Foja: 1

DÉCIMO NOVENO: Que, sin perjuicio de lo razonado hasta este punto, entendiendo que si el tribunal tiene la facultad de revisar la sanción, que es lo más, tiene entonces la facultad de revisar el monto de la misma, atendidas especialmente las consecuencias del accidente, la conducta adoptada por la reclamante con posterioridad a la visita inspectiva que dio origen al sumario, cuestión que es validada por la resolución exenta que dio lugar a la reconsideración planteada en contra de la resolución administrativa reclamada y considerando que el accidente que dio lugar a la sanción resulta ser un evento muy desafortunado, pero por lo demás, aislado en el funcionamiento de la fábrica en cuestión, cuestión que permite apreciar la real magnitud de la infracción y considerando finalmente el amplio rango que contempla el artículo 174 del Código Sanitario y teniendo especialmente presente también el complejo escenario económico que enfrenta nuestro país por la contingencia sanitaria que ineludiblemente a afectado en la actualidad a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas, lo que no excluye a la reclamante de autos, se accede a lo solicitado y se rebaja la multa aplicada a 100 Unidades Tributarias Mensuales, tal como se indicará en lo resolutive de esta sentencia.

VIGÉSIMO: Que, conforme a lo razonado y no habiendo resultado totalmente vencido el reclamante, cada parte deberá soportar sus costas, según fluye de lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 67, 166 y siguientes del Código Sanitario, 1698 y siguientes del Código Civil, 37 y 53 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Los Lugares de Trabajo y 17, 160, 170, 254, 341 y siguientes y 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Que se rechaza la reclamación deducida en forma principal por solicitud de fecha 21 de septiembre de 2018.
- II. Que, se acoge la rebaja solicitada en subsidio de la pretensión principal y en consecuencia se modifica la resolución exenta reclamada en aquella parte en que esta dispone la aplicación de una multa por la suma de 300 U.T.M, debiendo modificarse la cifra



C-29491-2018

Foja: 1

establecida por la cifra de 100 U.T.M de acuerdo con lo razonado al considerando vigésimo.

III. Cada parte soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívense, en su oportunidad.

Rol N° 29.491-2018.

Pronunciada por doña Paulina Sánchez Campos, Juez Suplente.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintidós de Junio de dos mil veinte**

